

CIVILIAN SECURITY, DEMOCRACY, AND HUMAN RIGHTS



EL PARADIGMA “3P”: PROCESAMIENTO, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

El paradigma “3P”, procesamiento con fines de enjuiciamiento, protección y prevención, sigue siendo el marco fundamental utilizado en todo el mundo para combatir la trata de personas. Estados Unidos también sigue este enfoque, que se refleja en el *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*, (Protocolo de Palermo) y en la Ley de protección de las víctimas de la trata de 2000 de Estados Unidos, en su forma enmendada (TVPA). La Oficina para el control y la lucha contra la trata de personas (Oficina TIP) del Departamento de Estado de Estados Unidos emplea una variedad de herramientas diplomáticas y programáticas para promover el paradigma 3P en todo el mundo. Además, una “4ª P” (del inglés “*partnership*”, asociación) - sirve como medio complementario para lograr el progreso a través del 3P y reclutar a todos los segmentos de la sociedad en la lucha contra la esclavitud moderna.

PROCESAMIENTO CON FINES DE ENJUICIAMIENTO

Bajo los marcos establecidos tanto en el Protocolo de Palermo como en la TVPA, la aplicación eficaz de la ley es un elemento indispensable de los esfuerzos del gobierno para combatir la trata de personas. En el Informe anual sobre la trata de personas, el Departamento de Estado analiza si los gobiernos penalizan todas las formas de trata de personas, investigan y enjuician enérgicamente los casos de trata de personas, y condenan y sentencian a los responsables de tales actos con penas de prisión lo suficientemente severas como para disuadir del delito y reflejar adecuadamente la abominable naturaleza de este crimen.

De conformidad con la TVPA, una respuesta eficaz de la justicia penal a la trata de personas debe tratar el enjuiciamiento de los casos con la misma seriedad que otros delitos graves como el secuestro o la violación. Los gobiernos deben responsabilizar penalmente a todos los autores de la trata de personas, incluidos los intermediarios conscientes de la intención de explotar, y no deben imponer penas suspendidas, multas o sanciones administrativas en lugar de penas de prisión. Lo ideal, y en concordancia con el Protocolo de Palermo, es que un marco legal centrado en la víctima también autorizara una restitución o compensación ordenada por el tribunal a las víctimas conjuntamente con la condena exitosa de los tratantes.

Las resoluciones no penales, como los procedimientos de mediación, no están a la altura de las normas del Protocolo de Palermo, que esencialmente definen la trata de personas como un delito que debe enjuiciarse, y no como un agravio civil que debe subsanarse únicamente con daños y perjuicios. Sin sentencias de prisión, los tratantes de personas no serán disuadidos eficazmente.

La Oficina TIP trabaja con sus socios en las distintas agencias y de aplicación de la ley dentro del gobierno de Estados Unidos, así como con ONG y organizaciones internacionales de todo el mundo, para ayudar a otros gobiernos a redactar e implementar leyes integrales contra la trata y procesar enérgicamente a los tratantes.

PROTECCIÓN

La protección es clave para el enfoque centrado en las víctimas que la comunidad internacional adopta en sus esfuerzos por combatir la esclavitud moderna. Una protección eficaz de las víctimas implica la identificación de las mismas, que se les remita a una amplia gama de servicios, el suministro directo o la financiación de las ONG para que presten tales servicios y el apoyo a esas personas a medida que reconstruyen sus vidas.

Identificar a las víctimas es un primer paso fundamental para asegurar su capacidad de recibir el apoyo y los recursos que necesitan. Los esfuerzos proactivos de identificación y capacitación para los equipos de respuesta rápida, los profesionales de la salud con licencia y otros proveedores de servicios son de importancia crítica para la capacidad de un gobierno de combatir la trata de personas. Después de la identificación, los gobiernos deben priorizar los derechos y necesidades de las víctimas para asegurar que los esfuerzos de protección se proporcionen de manera que se trate a las víctimas con dignidad y se les brinde a cada uno la oportunidad de regresar



a la vida que elijan. La Oficina TIP trabaja para fomentar la capacidad de los gobiernos y las ONG para mejorar la protección de las víctimas en países de todo el mundo.

Para proteger eficazmente a las víctimas extranjeras de la trata, los gobiernos deben permitirles permanecer en el país, trabajar y obtener servicios sin temor a ser detenidos o deportados por falta de estatus legal o por delitos que sus tratantes las obligaron a cometer. Además, los gobiernos deben facilitar el proceso para que las víctimas obtengan ayuda en materia de inmigración. Deben establecerse salvaguardias para garantizar la seguridad de las víctimas, así como de los miembros de sus familias que puedan correr riesgo de sufrir intimidación o represalias por parte de los tratantes. En los casos en que las víctimas de la trata, ya sean adultos o niños, hayan adquirido antecedentes penales al haber cometido delitos resultado de haber sido objeto de la trata, esos antecedentes deben ser anulados o eliminados.

Una protección adecuada de las víctimas requiere asociaciones eficaces entre las fuerzas del orden público y los proveedores de servicios, no sólo inmediatamente después de la identificación, sino también durante toda la participación de la víctima en la justicia penal o en las actuaciones civiles.

Los servicios integrales para las víctimas incluyen servicios de emergencia y a largo plazo; gestión intensiva de su caso, vivienda, alimentación, atención médica y dental, y asistencia letrada; así como acceso a oportunidades educativas, vocacionales y económicas. Los esfuerzos para apoyar a las víctimas extranjeras de la trata mientras reconstruyen sus vidas incluyen la repatriación voluntaria y la asistencia en sus comunidades de origen.

PREVENCIÓN

Los esfuerzos de prevención son un componente igualmente importante del movimiento mundial para combatir la trata de personas. Los esfuerzos de prevención eficaces abordan directamente las tácticas de los tratantes de personas. Con la difusión de información precisa y específica, las comunidades estarán mejor preparadas para responder a la amenaza de la trata de personas. Los programas de intervención estratégica pueden llegar a las poblaciones de riesgo antes de que se enfrenten a las prácticas engañosas de reclutamiento de quienes se empeñan en explotarlas para el trabajo o el sexo comercial. Las asociaciones significativas entre los sectores público y privado y la sociedad civil pueden ampliar la concienciación, aprovechar los conocimientos especializados y facilitar soluciones creativas.

Los esfuerzos de prevención también deben encapsular esfuerzos transversales, tales como enmendar las leyes laborales para que no omitan a ciertas clases de trabajadores de su cobertura; hacer cumplir enérgicamente las leyes laborales, particularmente en los sectores donde la trata es más habitual; implementar medidas tales como el registro de nacimiento, que reduzcan la vulnerabilidad a la trata; desarrollar y observar programas de contratación laboral para proteger a los trabajadores de la explotación; fortalecer las asociaciones entre las fuerzas del orden público, el gobierno y las ONG; hacer hincapié en la aplicación eficaz de políticas con una aplicación más estricta, una mejor presentación de informes y normas empresariales respaldadas por el gobierno; supervisar las cadenas de suministro para abordar el trabajo forzado, incluso mediante políticas de contratación pública; y trabajar para reducir la demanda de sexo comercial.

Además, las recientes innovaciones en la participación del sector privado en la lucha contra la trata de personas tienen potencial para promover los esfuerzos de prevención. Un nuevo impulso a la rendición de cuentas por parte de las empresas exige que éstas presten mayor atención a sus cadenas de suministro, en particular para evaluar la contratación de su mano de obra y la de sus proveedores, incluyendo a los que cosechan, recolectan o extraen materia prima.

Con el tiempo, surgirán y evolucionarán nuevas medidas y métodos de prevención a medida que los gobiernos y las partes interesadas en la lucha contra la trata apliquen la experiencia y compartan las lecciones aprendidas. Aunque a menudo son los más difíciles de medir, los esfuerzos de prevención pueden volverse más sofisticados, hacerse a escala y hacerse más eficaces si cuentan con el apoyo de suficientes recursos y voluntad política.

Los esfuerzos de procesamiento con fines de enjuiciamiento, protección y prevención están estrechamente entrelazados. De hecho, la eficacia de las tres propuestas radica en su naturaleza y complementariedad con que se refuerzan mutuamente. El enjuiciamiento, por ejemplo, tiene un efecto disuasorio y puede impedir que se produzca la trata de personas. Del mismo modo, la protección puede empoderar a quienes han sido explotados para que no vuelvan a ser victimizados una vez que se reinserten en la sociedad. Un enjuiciamiento centrado en la víctima que permita a un sobreviviente participar en el procesamiento es parte integral de los esfuerzos de protección.

Usando el paradigma 3P, la Oficina TIP trabaja todo el año para evaluar los esfuerzos de los gobiernos, abogar por respuestas más eficaces y apoyar a las organizaciones internacionales y a las ONG dedicadas a combatir la trata de personas en todo el mundo.